

SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A 11 DE OCTUBRE DEL 2024.
OFICIO NO.: SSC/DJ/2127/2024.
EXPEDIENTE: 209/UTSPC/2024.
FOLIO DE LA SOLICITUD: 210439424000201.

C. MARÍA FERNANDA CHÁVEZ HERNÁNDEZ.
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.

Sirva el presente para enviar un cordial saludo, así como también, en atención y cumplimiento a su oficio número **UTSPC/578/2024** de fecha 13 de Septiembre de 2024, publicado en el *site* interno de la Dirección de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, mediante el cual requiere dar trámite a la solicitud de acceso a la información pública presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el 09 de Enero de 2024; con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 Estructura de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 207, 208, 209 y 212 de la Ley Orgánica Municipal; 2 fracción V 113, 114, 115 fracción I, 116, 118, 119, 123 fracción I, IV, V, VI y XII, 124, 126, 127, 130, 131, 132, 150, 156 fracción I y II, 155, 161 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así como en lo establecido en los lineamientos Cuarto, Séptimo fracción I, Vigésima Cuarta y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, con base en los siguientes: Con fecha trece de Septiembre de dos mil veinticuatro, a las trece horas, un minuto, cincuenta segundos, el solicitante presentó una solicitud de acceso a la información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, asignándole el folio **210439424000201**, a través de la cual requirió:

A quien corresponda en el H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula:

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o a quien corresponda la siguiente información relacionada con el personal de policía de tránsito con el objetivo de mejorar la asistencia en el tránsito peatonal en una escuela específica: Escuela Instituto García de Cisneros: En esta Institución, se observa la presencia constante o casi constante de un policía de tránsito que asiste en el paso peatonal ubicado en la entrada durante las horas de entrada y salida de clases. Cabe mencionar que, aunque muchas otras escuelas también cuentan con pasos peatonales en sus entradas, no todas reciben el apoyo de un oficial de tránsito o alguna otra autoridad que apoye al tránsito peatonal, Aprecio el apoyo brindado a esta escuela, el cual considero debería extenderse a todas las escuelas para garantizar la seguridad de los niños y niñas de Cholula. Sin embargo, esta asistencia parece ser exclusiva para ciertas escuelas. En este contexto, solicito la siguiente información:

Elaboró
RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia



1. ¿Cuántos elementos de policía de tránsito están asignados al municipio de San Pedro Cholula?
2. ¿Cuántos de estos elementos están actualmente brindando apoyo a escuelas en el municipio?
3. ¿Está esta actividad dentro de las atribuciones de los policías de tránsito?
4. ¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar este apoyo en las escuelas durante las horas de entrada y salida?
5. ¿A quién debe dirigirse una solicitud para obtener este tipo de apoyo?
6. ¿Cómo se puede solicitar ser promotor voluntario de seguridad vial, qué capacitación se ofrece y qué atribuciones se tienen?
7. ¿Cómo y dónde solicitar señalización vial de Proximidad de escuelas, o existe algún programa por parte del municipio que se este llevando a cabo señalización vial en general?
8. Además, solicito un informe detallado que justifique la ausencia de policías en los siguientes cruces importantes de la cabecera municipal durante las horas de entrada y salida de las escuelas:
 - Av. Morelos y sus cruces: 2 Sur, Miguel Alemán, 3 Sur y 5 Sur.
 - Calle 3 Norte y sus cruces: 4 Poniente, 6 Poniente, 8 Poniente y 10 Poniente.
 - 2 Norte y sus cruces: 8 Oriente y 10 Oriente.
 - Calle 6 Norte y sus cruces: 8 Oriente y 10 Oriente.Estos cruces presentan un congestionamiento vial significativo debido a la alta circulación de vehículos en horas pico. La presencia de personal de tránsito en estas zonas podría ayudar a descongestionar las vialidades, reduciendo los tiempos de traslado. Esta situación se agrava aún más cuando se cierran calles por preparaciones o eventos como la feria de San Pedro Cholula.

Atento a lo anterior, hago de su conocimiento que, por cuanto hace a la solicitud de información, consistente en:

3. ¿Está esta actividad dentro de las atribuciones de los policías de tránsito?

Si, es dentro de sus funciones el brindar asistencia en entradas y salidas de escuelas.

4. ¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar este apoyo en las escuelas durante las horas de entrada y salida?

Dichos apoyos se dan mediante la solicitud por medio de un oficio.

5. ¿A quién debe dirigirse una solicitud para obtener este tipo de apoyo?

Dicha solicitud debe ir dirigida al Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, con copia para el Director de Vialidad Municipal de la Secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

6. ¿Cómo se puede solicitar ser promotor voluntario de seguridad vial, qué capacitación se ofrece y qué atribuciones se tienen?

Al momento de la respuesta, no hay algún programa para capacitar a ciudadanos con la intención de ser promotores voluntarios en seguridad vial; sin embargo, hay un departamento encargado de brindar capacitaciones en materia de seguridad vial.

7. ¿Cómo y dónde solicitar señalización vial de Proximidad de escuelas, o existe algún programa por parte del municipio que se este llevando a cabo señalización vial en general?

Elaboró
RASL

Se solicita mediante un oficio dirigido a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales del Honorable Ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

8. **Además, solicito un informe detallado que justifique la ausencia de policías en los siguientes cruceros importantes de la cabecera municipal durante las horas de entrada y salida de las escuelas:**

- **Av. Morelos y sus cruces: 2 Sur, Miguel Alemán, 3 Sur y 5 Sur.**
- **Calle 3 Norte y sus cruces: 4 Poniente, 6 Poniente, 8 Poniente y 10 Poniente.**
- **2 Norte y sus cruces: 8 Oriente y 10 Oriente.**
- **Calle 6 Norte y sus cruces: 8 Oriente y 10 Oriente.**

Estos cruces presentan un congestionamiento vial significativo debido a la alta circulación de vehículos en horas pico. La presencia de personal de tránsito en estas zonas podría ayudar a descongestionar las vialidades, reduciendo los tiempos de traslado. Esta situación se agrava aún más cuando se cierran calles por preparaciones o eventos como la feria de San Pedro Cholula.

Se hace de conocimiento que derivado a la operatividad se intenta cubrir el mayor número de escuelas; sin embargo, en ocasiones por temas de estados de fuerza de la Dirección de Vialidad Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, no se pueden cubrir en su totalidad las calles con mayor afluencia vehicular. Sin embargo, siempre se trata de establecer elementos en puntos estratégicos que generen mayor afluencia vehicular.

Por cuanto hace a la solicitud de información, consistente en:

1. **¿Cuántos elementos de policía de tránsito están asignados al municipio de San Pedro Cholula?**
2. **¿Cuántos de estos elementos están actualmente brindando apoyo a escuelas en el municipio?**

Manifiesto lo siguiente:

ANTECEDENTES.

Mediante oficio número **UTSPC/578/2024** de fecha 13 de Septiembre de 2024, publicado en el *site* interno de la Dirección de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, firmado por la Directora de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, por medio del cual requirió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, que, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 17, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154 y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, determinar si es procedente dar el acceso a la información pública solicitada, consistente, en lo siguiente:

Elaboró
RASL



A quien corresponda en el H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula:

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o a quien corresponda la siguiente información relacionada con el personal de policía de tránsito con el objetivo de mejorar la asistencia en el tránsito peatonal en una escuela específica: Escuela Instituto García de Cisneros; En esta Institución, se observa la presencia constante o casi constante de un policía de tránsito que asiste en el paso peatonal ubicado en la entrada durante las horas de entrada y salida de clases. Cabe mencionar que, aunque muchas otras escuelas también cuentan con pasos peatonales en sus entradas, no todas reciben el apoyo de un oficial de tránsito o alguna otra autoridad que apoye al tránsito peatonal, Aprecio el apoyo brindado a esta escuela, el cual considero debería extenderse a todas las escuelas para garantizar la seguridad de los niños y niñas de Cholula. Sin embargo, esta asistencia parece ser exclusiva para ciertas escuelas. En este contexto, solicito la siguiente información:

1. ¿Cuántos elementos de policía de tránsito están asignados al municipio de San Pedro Cholula?
2. ¿Cuántos de estos elementos están actualmente brindando apoyo a escuelas en el municipio? (Sic)

CONSIDERANDO.

De la solicitud transcrita textualmente, se desprende que la información solicitada es clasificada como reservada, atendiendo a lo que a continuación se detalla:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 19.

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Convención Europea de Derechos Humanos:

Artículo 10. Libertad de expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 6, apartado A, fracción I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser



reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Artículo 16 párrafo segundo. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

Primero. Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla:

Artículo 123 Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada:

I. La que comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

IV. La que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;

Elaboró
RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia



V. La que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VI. La que obstruya la prevención o persecución de los delitos;

XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Artículo 110.- Los integrantes del Sistema están obligados a permitir la interconexión de sus Bases de Datos para compartir la información sobre Seguridad Pública con el Sistema Nacional de Información, en los términos de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. Para efecto de dar cumplimiento al párrafo anterior, se adoptarán los mecanismos tecnológicos necesarios para la interconexión en tiempo real y respaldo de la información. La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen. Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternativas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, [cuya consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga].

Ley de Seguridad Pública para el Estado de Puebla:

Artículo 102 El Sistema, a través de sus instancias, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre seguridad pública, mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos. El acceso a las bases de datos estará condicionado al cumplimiento de la Ley General, esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones legales.

Artículo 103 Las instancias integrantes del Sistema están obligadas a compartir la información sobre seguridad pública que obre en sus bases de datos correspondientes, entre sí y con el Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables. La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública

Elaboró

RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

Artículo 104 El reglamento correspondiente señalará los instrumentos de acopio de datos que permitan analizar la incidencia criminológica y, en general, la problemática de seguridad pública en los ámbitos estatal y municipal, con el propósito de planear las estrategias políticas tendentes a la preservación del orden y la paz públicos. Para este efecto, dispondrán de los mecanismos que permitan la evaluación y reordenación, en su caso, de las políticas de seguridad pública.

Artículo 105 Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran el Registro Administrativo de Detenciones; su violación se sancionará de acuerdo a las disposiciones previstas en la legislación aplicable.

Artículo 106 Las instancias integrantes del Sistema serán responsables de integrar y actualizar el Sistema Único de Información Criminal, con la información que generen éstas y que coadyuven a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades el orden y la paz públicos mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del sentenciado y del adolescente sujeto a medida de internamiento.

Artículo 107 Las instancias integrantes del Sistema, inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, los datos relativos a las personas integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de esta Ley. Para efectos de esta Ley, se considerarán como personas integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente otorgado por autoridad competente.

Robustece a los ordenamientos referidos, el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los

Elaboró

RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Registro digital: 2000233, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a. VII/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 655, Tipo: Aislada

Este criterio fue emitido con antelación a la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo, mantiene una argumentación acorde con lo que aquí se plantea.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 3o., FRACCIÓN II, Y 18, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IGUALDAD, AL TUTELAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SÓLO DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

Si se toma en cuenta que la garantía constitucional indicada no implica que todos los sujetos de la norma siempre se encuentren en condiciones de absoluta igualdad, sino que gocen de una igualdad jurídica traducida en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado, se concluye que los artículos 3o., fracción II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

Elaboró
RASL

a la Información Pública Gubernamental, al tutelar sólo el derecho a la protección de datos personales de las personas físicas y no de las morales, colectivas o jurídicas privadas, no violan la indicada garantía contenida en el artículo 10. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal distinción se justifica porque el derecho a la protección de los datos personales se refiere únicamente a las personas físicas por estar encausado al respeto de un derecho personalísimo, como es el de la intimidad, del cual derivó aquél. Esto es, en el apuntado supuesto no se actualiza una igualdad jurídica entre las personas físicas y las morales porque ambas están en situaciones de derecho dispares, ya que la protección de datos personales, entre ellos el del patrimonio y su confidencialidad, es una derivación del derecho a la intimidad, del cual únicamente goza el individuo, entendido como la persona humana.

Amparo en revisión 191/2008. Grupo Senda Autotransporte, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

Nota: Por ejecutoria del 25 de abril de 2012, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 38/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Tal y como se establece en el artículo 6 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la información se encuentra garantizado por el Estado. En ese sentido, es importante resaltar el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Por tal razón, y en aras de maximizar el ejercicio de dicho derecho, es obligación del estado garantizar la publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad y, sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.

Ante ello, deviene necesario enunciar los ordenamientos jurídicos que establecen las funciones a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, con base en los cuales, se podrá demostrar que este ente de la administración pública tiene a su cargo, actividades destinadas a la seguridad ciudadana y/o pública.

El Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024, emitido por Acuerdo de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, en sesión celebrada de fecha 14 de enero de 2022, estableció diversos ejes rectores, siendo uno de ellos el denominado "Tranquilidad", en donde el objetivo general de su plan de acción es regular la gobernabilidad para el buen desarrollo las políticas públicas en

seguridad pública, prevención del delito, derechos humanos, certeza jurídica y protección civil para contribuir a la tranquilidad y la seguridad del municipio.

Este eje contiene estrategias y líneas de acción, aplicables a este organismo, y orientadas a la implementación e impulso de la reingeniería tecnológica y administrativa de seguridad y justicia en el municipio de San Pedro Cholula; todo lo anterior, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los principios que de ella emanan para poder garantizar la seguridad de la ciudadanía de San Pedro Cholula.

La Ley Orgánica Municipal, en su Capítulo XXIII "de la Seguridad Pública Municipal" establece que es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los habitantes. La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; así como las atribuciones de los Ayuntamientos en materia de seguridad pública, entre otras, las de garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos, pugnar por la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública municipal.

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, establece cuales son las funciones del Sistema de Seguridad Pública del Estado comprende la integración de políticas, planes, servicios, programas, acciones, información, así como las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad. El ejercicio y aplicación de las mismas se realizará de manera conjunta, ordenada y sistémica, a través de sus integrantes y con la participación ciudadana en los supuestos legales aplicables.

Bajo lo conceptualizado, y ante la posibilidad de la probable difusión de la información solicitada, se advierte en el evento de dar a conocer dicha información se generaría un perjuicio directo al interés público al verse vulnerada la seguridad del municipio de San Pedro Cholula.

Por las razones antes señaladas, y con base en lo dispuesto por los artículos 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 123 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se estima de hacerse pública la información solicitada por el peticionario, se estaría comprometiendo la seguridad pública del municipio de San Pedro Cholula y por ende la del estado de Puebla e incluso la de la Federación, ya que, entre otras cosas, se comparte información al estado de Puebla y a la Federación por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y así se pondría en

Elaboró
RASL

riesgo las funciones de las instituciones de seguridad integrantes del Sistema Estatal de Seguridad, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo:

1. La Seguridad del Estado,
2. La información protegida por una ley, y
3. La información objeto de integración para la procuración de justicia.

En otras palabras, se requiere de hacer una valoración de los derechos en conflicto, en el caso que nos ocupa, el derecho a la publicidad contra el derecho a la seguridad, para poder determinar de manera cierta que la primera pone en riesgo a la segunda, y por ello procede una reserva de la información.

Del mismo modo, se vulneraría el orden público, toda vez que la difusión de la información antes referida entorpecería los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública y/o ciudadana, limitando la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida bajo el número de registro 2012526:

DERECHO A SER INFORMADO. SUS ALCANCES Y LÍMITES.

El derecho a ser informado implica una obligación positiva a cargo del Estado, consistente en informar a la sociedad respecto de aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento por los particulares. No obstante, lo anterior no significa que el Estado y sus instituciones deban difundir toda la información que posean, ya que la actualización de esta obligación requiere la necesaria existencia de un interés público que justifique publicar de oficio cierta información. Por tanto, el Estado y sus instituciones están obligados a publicar de oficio sólo aquella información relacionada con asuntos de relevancia o interés público que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas, y que sea necesaria para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva. No obstante, lo anterior, el Estado puede restringir la publicación de información cuya difusión pueda constituir un peligro para la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, así como cuando pueda alterar, afectar o trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas.

Amparo directo en revisión 2931/2015. Napoleón Gómez Urrutia. 13 de abril de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; se aparta de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos; se aparta de algunas consideraciones José Fernando Franco González Salas. Mayoría de tres votos en relación con el criterio contenido en esta tesis; votó en contra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Marco Tulio Martínez Cosío.

Elaboró
RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia



Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a. LXXXVI/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 840, Tipo: Aislada

Comentario: Lo resaltado es propio.

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."

Décima Época, Núm. De Registro: 2012526, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia: Constitucional, Tesis: 2ª. LXXXVI/2016 (10ª.), Página 840.

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD. COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la Información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeta a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra

Elaboró

RASL



excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Época: Novena, Registro: 191967, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. LX/2000., Página: 74

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.

Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce, el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 743. de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL." contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional pues se trata de un derecho fundado en uno de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, consideraría con una calidad diversa.

Época: Décima Época. Registro: 2002944. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.4o.A.40ª (10a.). Página: 1899

De lo anterior, se advierte que la información que bajo su resguardo tienen y deben proporcionar los sujetos obligados del Estado; encuentra como excepción aquella que sea **reservada o confidencial**, cuyos supuestos se encuentran contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, cuando de su difusión pueda devenir en perjuicio a la seguridad nacional, violación de los intereses de la sociedad o los derechos de los gobernados.

Elaboró

RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

PRUEBA DE DAÑO.

Por otro lado, la Ley indica que es considerada como información reservada la que la que comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física, la que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones, la que obstruya la prevención o persecución de los delitos y las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; información cuya reserva deberá hacerse fundando y motivando a través de la aplicación de la prueba de daño, justificando que de conocerse la información que se está clasificando, generaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público y que ese riesgo debe superar el interés público de que se difunda, siendo este supuesto confirmado por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, con base a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, Capítulo I, Disposiciones Generales, párrafo segundo, fracción XIV, en donde establece la definición de prueba de daño:

XIV. Prueba de daño: La argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla;

La prueba de daño es una demostración para realizarse y acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y el menoscabo susceptible de producirse con la publicación de la información es mayor que el interés de conocerla.

Consiste en un análisis para justificar la clasificación de la información como reservada de cierta información, que, en términos generales, se estima como pública, sin embargo, debido al perjuicio ocasionado por divulgar tal información supera al interés público por salvaguardar la seguridad del municipio de San Pedro Cholula, la reserva subyace a favor de la transparencia.

Se debe demostrar el menoscabo a sufrir por el municipio de San Pedro Cholula, el estado de Puebla, la Federación y la sociedad en general, al hacer pública la información solicitada por el petionario.

En ese sentido, debe analizarse si la información que se pretende clasificar como reservada, se adecua en las hipótesis previstas por los numerales 113 fracción I y XIII de

Elaboró
RASL

15 Norte, Número 1205, San Matías Cocoyotla,
C.P. 72760, San Pedro Cholula, Pue. México.

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

15 Norte, Número 1205, San Matías Cocoyotla,
C.P. 72760, San Pedro Cholula, Pue. México.



la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 123 fracción I, IV, V, VI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, respectivamente y de ser así, analizar si se acredita la prueba de daño.

El artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, establece con relación a la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar:

- a) La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;
- b) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera al interés público general de que se difunda; y
- c) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Respecto al inciso marcado como a), se establece procederá cuando la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en este caso, la seguridad ciudadana y/o pública.

Ante ello, se reitera la demostración del riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público, no requiere el desahogo de medio de prueba alguno, ya que la seguridad pública es de interés general, por encima de cualquier interés particular, constituyéndose esto como un hecho notorio, entendiendo por hecho notorio, en general, aquellos que el conocimiento humano, se consideran ciertos e indiscutibles, tal y como lo define la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la

Elaboró

RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.

*Novena Época, Registro: 174899, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 74/2006
Página: 963*

En este contexto, bastaría precisar las razones objetivas por las que la publicación de la información generaría un perjuicio directo a la seguridad pública y la paz social.

En ese tenor, y con base en el punto trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se podrá clasificar como información reservada aquella cuya difusión comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y efecto demostrable, o bien, pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona.

Por ende, a continuación, se exponen las razones conforme a las cuales la divulgación de la información solicitada por el peticionario generaría un riesgo real, demostrable e identificable:

- 1) Se pondría en riesgo la operatividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula, al ser su objetivo primordial garantizar la seguridad mediante la implementación y operación de recursos tecnológicos en el municipio, en aras de salvaguardar la integridad, libertad, bienes y derechos de las personas, constituye estrategias, operativos, datos delictivos, entre otros, y al difundir la información que resguarda sería de acceso público para quienes se dedican a conductas delictivas.
- 2) Produciría un menoscabo en los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública en todos sus niveles, además de dificultar la capacidad de las corporaciones para disuadir y prevenir disturbios de carácter social incluyendo la comisión de hechos delictivos de bajo y alto impacto.
- 3) Proporcionaría conocimiento de información a personas ajenas propiciando a estas adoptar como *modus vivendi*, el comportamiento delictivo, aprovechen la obligación de apertura y divulgación de la información pública para conocer la capacidad de reacción de las corporaciones en materia de seguridad, poniendo en riesgo la capacidad y estrategia de los operativos a implementarse para la atención y respuesta de los centros de emergencia en favor de la ciudadanía.
- 4) Se pondría en peligro la integridad física, salud y vida de los servidores públicos encargados de desarrollar funciones operativas en materia de seguridad.

Elaboró
RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

- 5) Se perjudicarían las acciones de coordinación entre las diversas corporaciones en materia de seguridad tanto municipal, estatal y federal.
- 6) La coordinación y organización de los elementos de seguridad ciudadana serían susceptibles de ataques por los diversos grupos y organizaciones criminales.
- 7) Se vulnerarían las medidas de seguridad para el resguardo y seguridad de la ciudadanía ante los constantes y probables ataques por parte de los diversos grupos delictivos.
- 8) Se mermarían las medidas de seguridad respecto los elementos del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que comprende la integración de políticas, planes, servicios, programas, acciones, información, así como las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad.
- 9) Se comprometería la administración y operación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula en el comando, operación, monitoreo y control del sistema de video vigilancia, operación informática, análisis de información, atención de las líneas de emergencia y denuncia anónima.

El otorgar publicidad de información tan detallada, constituye una pretensión distante del interés público y recae al ámbito de la curiosidad, y carecería de respaldo legal, por lo que en aras de garantizar la seguridad pública y, con ello, proteger los bienes jurídicos como la vida, la integridad y la salud de la colectividad, en un ejercicio de ponderación, se establece tiene mayor peso la protección a la seguridad pública que el derecho de una persona a la información pública.

Al ponderar el riesgo de perjuicio y el interés público en la divulgación de la información se deberá considerar el mitigar los perjuicios causados por dicha difusión de información con relación a las actividades desarrolladas.

Por lo anterior, se encuentran colmados los extremos exigidos en el **inciso a)**, respecto el riesgo real, demostrable e identificable que representa al interés público la divulgación de la información con la que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula.

En este caso, y relativo al **inciso b)**, deberá, primeramente explicarse el concepto de interés público, que puede definirse como el resultado de un conjunto de intereses compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los

Elaboró
RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

intereses individuales que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o sustituye, sin arruinarlos.

El interés público va a estar relacionado, en todo momento con necesidades de la colectividad que están tuteladas y protegidas por el Estado de Derecho, por lo cual va a requerir de la intervención permanente del estado.

El derecho a la información establecido por el artículo 6 apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es absoluto, al encontrarse sujeto a ciertas limitaciones o excepciones cuyo propósito único es la protección a la seguridad del Estado Mexicano y a los intereses de su sociedad.

El derecho restringido al acceso a determinada información no está coartando, por sí mismo, al gobernado la posibilidad de obtener información, que en su caso sea de interés, sino se está emitiendo una ponderación jurídica respecto al valor de la información sobre el interés público y general de salvaguardar la seguridad del Estado por encima del derecho de mantenerse informado de MANERA INDIVIDUAL.

Debe entenderse es de interés para todos los individuos de una sociedad, de que exista un ambiente donde gobierne la armonía y sientan un entorno de seguridad, donde la investigación, persecución y en su caso sanción de los hechos delictivos se lleva a cabo.

Estos constituyen no solo para todos los miembros de la sociedad sino se convierten día a día en exigencias al Estado, en consecuencia, al no existir nada que se contraponga a ellos como intereses públicos, sería una tergiversación pretender poner sobre ellos un interés particular que desear estar informado, aún y cuando éste sea un Derecho.

El hecho de reservar la información relacionada con la seguridad del Estado constituye un interés público, ya que de divulgarse ocasionaría posiblemente un daño mayor al bien, que con su difusión pudiera llegar a brindar.

Esta reserva de información, protege el interés público traducido en la seguridad para toda la ciudadanía, estableciendo con ello la protección específica a la integridad, la vida, la salud, los bienes, las propiedades de cada uno de los ciudadanos del Estado, y esto, está por encima del interés particular al derecho a estar informado en determinado tema específico de INTERÉS PARTICULAR, en caso contrario, se pondría en peligro, no solo la seguridad estatal sino también la estabilidad de la estructura administrativa y operativa de las instituciones de seguridad del Estado y sus integrantes.

Ahora bien, por cuanto hace al inciso c), relacionado al principio de proporcionalidad, "La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio", debe decirse que obligar a la Secretaría de

Elaboró

RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia



Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula a entregar cualquier información, habida en sus archivos físicos o electrónicos, registros y demás medios de concentración de información, ya sea solicitada de manera general o particular, a todo aquel sin autorización para ello, en cuyo caso, el texto de la norma impide a los particulares el acceder a dicha información, y el hecho de permitirles el acceso a ella sería un quebrantamiento al texto normativo y sus obligaciones de parte de ésta Secretaría que no pueden ir más allá de lo permitido por las legislaciones vigentes, sin embargo, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado por nuestra normatividad en materia de Transparencia y actuar siempre apegado a la Ley, es que se realiza la presente prueba de daño.

Es necesario recordar que el principio de máxima publicidad se encuentra supeditado por nuestra Carta Magna al hecho de que no se vulnere el interés público y la seguridad pública; es decir, no representa un principio absoluto, si no se encuentra expuesto a la colisión que pudiera tener con otros valores constitutivos del marco jurídico mexicano; de esa forma, se observará que la seguridad nacional y el interés público está por encima del derecho a la información, por cuanto hace a la realizada por el peticionario.

Idóneo. - Este elemento constitutivo de la proporcionalidad, implica la promoción de un principio u objetivo a satisfacer, es decir, justificar una finalidad constitucionalmente válida, conforme al cual no cualquier propósito puede legitimar la limitación de un derecho fundamental.

En esa medida, el hecho de que se pretenda conocer la información habida bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, no cumple con la finalidad establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser esta clara en establecer que el acceso a la información está supeditado a no vulnerar el interés público a la seguridad nacional, y estos serían violentados, al poner en riesgo la paz y el orden públicos.

El derecho a estar informado, en el caso de la solicitud formulada por el peticionario, no justifica la finalidad expuesta en la Constitución, pues esta limita el acceso a la información en los supuestos previamente estipulados.

De lo anterior, se advierte el presente elemento, consistente en la idoneidad se encuentra satisfecho.

Necesario. - Si existen diversas opciones para satisfacer un principio, se debe elegir aquella susceptible de afectar en menor medida al otro principio.

Es por demás claro, que en el estudio que nos ocupa, existen dos principios que constantemente colisionan, el acceso a la información, frente al interés público y la seguridad nacional.

De esa forma, debe reiterarse que en el propio dispositivo legal ya ha realizado un ejercicio de ponderación y frente al principio de máxima publicidad, se salvaguardó el interés público y la seguridad nacional, que en el caso que nos ocupa se verían vulnerados, ante la difusión de la información materia de la presente prueba de daño en relación a la solicitud de información formulada por el peticionario.

Por lo anterior, se considera que el elemento relativo a la necesidad se encuentra colmado.

Proporcionalidad. - Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro.

Como se ha expuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha dejado en claro que el principio de máxima publicidad tiene dos limitantes, la salvaguarda del interés público y la seguridad nacional.

Ante ello, resultaría imposible poner en la balanza dos principios que se excluyen como el proteger el derecho al acceso a la información de un sujeto en lo particular y la afectación al interés público y la seguridad del Estado, es decir, uno consiste precisamente en la excepción o límite al que le da origen, por tanto, se encuentra cubierto el principio de proporcionalidad. Atento a lo anterior, tiene aplicación el siguiente criterio.

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.

Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue

Elaboró
RASL

15 Norte, Número 1205, San Matías Cocoyotla,
C.P. 72760, San Pedro Cholula, Pue. México.

cholula.gob.mx

Trabajo y familia

creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarlo lo que ofrezca en sus términos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo.

Nota: Por ejecutoria del 13 de octubre de 2021, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 159/2021, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Registro digital: 2004949, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Común, Tesis: I.3o.C.35 K (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, Tipo: Aislada.

De lo anterior, podemos advertir, que, si bien es cierto, la información en poder del Estado debe ser de dominio público, este derecho también admite la posibilidad de restringirse como una excepción.

Por todo lo anterior, no existe medio menos lesivo y restrictivo que la imposibilidad de dar cauce a la petición realizada por el solicitante de la información, decretándose la reserva de la misma, pues la divulgación de información solicitada, pondría en peligro y riesgo la materia sobre la que versa la seguridad pública y/o ciudadana, por lo que, en el caso que nos ocupa, es menester de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, optar por la reserva de la información solicitada, pues no debe de prevalecer la observación de un interés personal absoluto sobre el interés público, lo cual ha quedado acreditado fehacientemente en la presente prueba de daño.

Por virtud de los argumentos legales vertidos en líneas que anteceden, a esa Dirección de la Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula, atenta y respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Se sirva clasificar en su modalidad de Reservada la información requerida por el solicitante en los términos contenidos en su solicitud, identificada con el número de folio **210439424000201**, por un periodo de cinco años o hasta en tanto subsistan las causas que le dan origen; esto a partir del once de octubre del año dos mil veinticuatro, en términos de los argumentos expuestos en el cuerpo del presente recurso, esto con fundamento en lo preceptuado por los artículos 123 fracción I, IV, V, VI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Elaboró
RASL

cholula.gob.mx

Trabajo y familia



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**
Va por todos



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO
CHOLULA

SEGUNDO. - Poner a la vista del Comité de Transparencia la presente clasificación de información, para que en uso de sus atribuciones conferidas en los artículos 20, 21 y 22 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, emita el acuerdo respectivo en relación con la presente prueba de daño, acordando de conformidad lo manifestado en el cuerpo del presente recurso en virtud de encontrarse apegado a Derecho.

Sin otro particular me despido de usted y me reitero a sus atentas y distinguidas órdenes.

**ATENTAMENTE
"VA POR TODOS"**

ABOGADO RAFAEL ARTURO SUAREZ LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
2021-2024

C.c.p.- Mtro. Sergio Fernández Martínez. - Secretario de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula. - Para su superior conocimiento.

Elaboró
RASL

15 Norte, Número 1205, San Matías Cocoyotla,
C.P. 72760, San Pedro Cholula, Pue. México.

cholula.gob.mx

Trabajo y familia